

TRANSFORMACIÓN DE LAS IDENTIDADES POLÍTICAS DEL CAMPO POPULAR PROGRESISTA EN ECUADOR

Renato Fabricio Villavicencio Garzón

Doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones
Internacionales

Universidad Complutense de Madrid

Mesa 129 – Confianza y desconfianza política, identidades y desafíos
democráticos

Trabajo preparado para su presentación en el XI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), organizado conjuntamente por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y la Asociación Chilena de Ciencia Política, Santiago, Chile, 21, 22 y 23 de julio 2022.

Resumen:

Desde el retorno a la democracia en Ecuador se han dado muchos cambios a nivel político, económico y social. El objetivo de este trabajo se centra en utilizar el marco conceptual constructivista de la Teoría del Discurso Político para hacer una lectura histórica que nos permita entender cuáles han sido las transformaciones en las identidades políticas del campo popular progresista en el país andino. Para este fin se han elegido cuatro criterios para visualizar mejor estos cambios, y que son: relaciones de alteridad, representación, perspectiva de la tradición y lugar de enunciación. Los principales hallazgos se centrarán en entender como la aparición de nuevos liderazgos, colectivos e individuales, condicionaron la evolución de los discursos del campo popular progresista o la aparición de otros nuevos desde el final de la dictadura militar, en 1979, hasta los gobiernos de la Revolución Ciudadana posterior al año 2007.

Palabras clave: Ecuador, Movimiento indígena, Revolución Ciudadana, Oligarquía, Discurso político

Introducción

Desde el retorno a la democracia en el Ecuador el país ha vivido décadas de importantes cambios. La disputa política se ha construido en el enfrentamiento de los actores del campo popular progresista frente a aquellos dentro del campo oligárquico neoliberal. Estos actores son parte de todo un sistema discursivo que articula símbolos, acciones, historia y liderazgos que *configuran sentidos y establecen solidaridades estables capaces de definir la acción colectiva con respecto a asuntos públicos*, y se los puede conceptualizar como identidades políticas. Este enfoque constructivista del discurso considera que los objetos sociales no poseen un sentido esencial natural, sino que su significado es construido socialmente mediante el relacionamiento de determinados actores a través del tiempo y son contingentes históricamente.

Lo que se pretende abordar en este estudio es el recorrido que las identidades políticas dentro del campo popular progresista ecuatoriano han tomado para irse transformando a través del tiempo, desde la década de los 80 hasta la aparición de la Revolución Ciudadana como proyecto y, eventualmente, como identidad política desde el año 2007 hasta el final de su gobierno en 2017. El objetivo es comprender cuáles y cómo los significantes, alteridades, mitos y liderazgos se construyeron en estas décadas evaporando lo viejo (movimiento sindical e izquierda marxista) y pariendo lo nuevo (movimiento indígena y nuevos movimientos sociales) en su disputa con su adversario, el campo oligárquico neoliberal y, también cuáles fueron las consecuencias dentro de estas identidades populares progresistas de la aparición de la Revolución Ciudadana como identidad revulsiva en 2007.

Marco teórico

Para indagar en el terreno de las identidades políticas es necesario que primero exploremos el terreno de la teoría política que sostiene a este concepto. Así repasaremos el enfoque del constructivismo y la Teoría del Discurso Político (TdP) con el objetivo de clarificar lo mejor posible el lugar desde donde plantearemos esta investigación, así como los marcos conceptuales que darán forma a las posteriores reflexiones que se harán a partir de la experiencia ecuatoriana. La identidad política es un concepto que no es usado muy frecuentemente en ciencias políticas, por lo que siempre resulta necesario explicitar el marco conceptual desde el cual partirá este análisis.

En ciencias sociales el constructivismo afirma que en el social toda significación es construida, es decir nada existe con una cualidad esencial o natural (Howarth, 1998). Esto

quiere decir que más allá del mundo físico, el o los sentidos que tienen las cosas para los seres humanos son contingentes, están en permanente disputa y, por consiguiente, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Así, este punto de partida tiene implicaciones importantes sobre lo que consideraremos a la sociedad o a lo social.

Estas elaboraciones o sistemas de significado que construyen lo social las podemos llamar *discurso*. La Teoría del Discurso “analiza de qué manera los sistemas de significado configuran la comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales” (Howarth, 1998). Y esto es importante entenderlo debido a que, siguiendo a Howarth, el constructivismo parte de la crítica en tres aristas al relato de la modernidad. Estas críticas son en un primer momento a las meta o grandes narrativas que se construyeron en distintas partes del mundo desde el siglo XIX para legitimar costumbres o como mecanismo totalizador, como la nación, el liberalismo o el propio marxismo. En segundo lugar, postula una crítica antifundacionalista para poner de manifiesto que no existe objetividad social, o, en otras palabras, no existe una verdad última que hay que descubrir o sobre la cual construir relatos sociales. Y, por último, la crítica antiesencialista que implica la imposibilidad de definir la esencia de lo que existe.

Pero aparte de las críticas desde donde parte la TdP, también debemos mencionar los pilares donde se asienta para construir sus postulados. Siguiendo a Alejandro Groppo, se plantea 3 principales premisas de la Teoría del Discurso: 1) los objetos y las prácticas sociales son simbólicamente construidas, 2) que la objetividad social es históricamente contingente, y 3) que la totalidad social está fracturada o dislocada (Groppo, 2012).

Sobre el primer punto, cabe plantear que este proceso de significación social es simbólicamente construido principalmente a través del lenguaje y la política, ya que es mediante este y sus diferentes formas, que los seres humanos pueden construir significado para toda la realidad que les rodea. Acerca de la segunda premisa, partimos desde el entendimiento que lo que le da significado a la realidad es una construcción, es decir es una alternativa dentro de otras varias, estas podrán variar a lo largo del tiempo dependiendo del contexto en las que se desarrollen.

Por último, debemos concebir que la idea de una sociedad completa cerrada sobre sí misma, cualquiera que esta sea, es imposible. Esto se debe a que la propia dinámica de significaciones que tratan de dar sentido a una realidad dada nunca desaparece, por más que exista una concepción dominante o hegemónica. Si existe un sistema de significaciones principal es debido a que existen otros que quedan fuera y a los que no se deja ser en

plenitud. Este un concepto extraído del pensamiento de Jacques Derrida, denominado “exterior constitutivo” y que Ernesto Laclau introdujo en sus modelos teóricos sobre hegemonía, populismo e identidades políticas. Las disputas de significaciones son fracturas en la totalidad social o dislocaciones que nunca pueden llegar a cerrarse completamente (Laclau, 2000).

Entonces, estos conceptos pueden aplicarse a diferentes escalas, desde una escala macro o social hasta una micro o individual, donde el sujeto político también debe ser considerado un ser incompleto en permanente dislocación con un exterior constitutivo discursivo. Podríamos decir que dentro de nivel medio se encuentran las identidades políticas como discursos colectivos que estructuran afinidades sociales para la interacción colectiva en una sociedad. Gerardo Aboy Carlés las define como el “conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen solidaridades estables capaces de definir la acción colectiva con respecto a asuntos públicos” o como el producto de significaciones imaginarias orientadoras de la acción (Aboy Carlés, 2001).

De este modo, es central para entender la constitución o la transformación de discursos (sean del sujeto, de identidades colectivas o hegemonías sociales) concebir que ningún sistema es capaz de cerrarse sobre sí mismo, por lo que fractura, incompletud o vacío es constitutivo para poder ser. El exterior constitutivo se muestra como aquellos significantes, símbolos o discursos que el sistema no puede absorber (Aboy Carlés, 2001). El antagonismo es una cuestión vital para estructuración social.

Para clarificar lo anterior es necesario también ahondar en lo que significa dentro de este esquema lo social y lo político. Aunque socialmente todo parte de una significación construida, esto no significa que todo significado este abierto y en permanente disputa. La propia inercia social permite que algunos significantes sociales se vayan consolidando a lo largo del tiempo dentro de un discurso dominante. Esto es a lo que se refiere Aboy Carlés con *prácticas sedimentadas*. Es decir, lo social incluiría costumbres, ideas, tradiciones y/o instituciones sobre las que existe un acuerdo de objetividad parcial que son la base sobre la que se construye el cualquier discurso hegemónico dado. Al contrario, lo político en una sociedad implica aquellos significantes e ideas que aún se encuentran en disputa, en donde el antagonismo se muestra claramente, y que forman parte del exterior constitutivo. Laclau describe al campo de lo político como “el momento del antagonismo, en el que se hace

plenamente visible el carácter indecible de las alternativas y su resolución a través de relaciones de poder” (Laclau, 2000).

Las dinámicas de significaciones o de interpelaciones de cualquier identidad pueden darse a través de dos lógicas, de la diferencia y de la equivalencia. La primera lógica da cuenta de una dinámica que interpela a la identidad de manera que la frontera de exclusión con otras identidades se mantiene de la misma forma, manteniendo el campo de lo social estable. Mientras que la segunda lógica presupone un desdibujamiento de las fronteras de los sujetos e identidades para la construcción de una nueva frontera con base a la negación común de todas estas.

Ahora bien, lo siguiente sería entender cuál sería el vehículo mediante el cual se realizan todas estas nuevas significaciones e interpelaciones entre sistemas discursivos o identidades políticas. El concepto de significante vacío es central en esta adscripción teórica. Es a través de este que el lenguaje, en lo más amplio del término, se vuelve el vehículo a través del cual se puede intentar imprimir cierre o un intento de totalidad a una identidad social. En otras palabras, el significante vacío lo que proporciona es un horizonte de totalidad para una identidad dada. Para Laclau, el significante vacío permite la operación mediante la cual un particular puede asumir una significación universal, el representar el todo. A este proceso él lo denomina hegemonía (Laclau, 2005).

Con los conceptos base hasta aquí resumidos muy brevemente podemos entender la dinámica de construcción y transformación de identidades desde la perspectiva constructivista. Solo faltaría agregar los criterios específicos con los que intentaremos estudiar el cambio en las identidades políticas en un estudio de caso concreto. En esta línea, seguiremos de manera general los planteamientos de Aboy Carlés para los cuales precisa tres criterios particulares, a los que añadiremos uno más para este estudio, y que son: alteridad, representación, perspectiva de la tradición (Aboy Carlés, 2001) y locus de enunciación.

La *alteridad* viene dada por la concepción del exterior constitutivo de toda identidad. Nos referimos a que no puede existir identidad(es) sin antagonismo de otro(s). El sistema de diferencia es el campo donde se constituyen y operan cualquier sistema discursivo. Esto implicará concebir al antagonismo como base fundamental de toda identidad en un sistema relacional de diferencias permanentes. Es decir, si queremos entender la constitución de una identidad social, debemos también indagar cuáles son las identidades y/o discursos que se le oponen o lo dislocan.

Si el ámbito de la alteridad se lo entendería como su relación de puertas para afuera de la identidad política, con al ámbito de la *representatividad* se debe considerar lo contrario. Es decir, indagar puertas adentro de la identidad política en cuestión. Nos referimos específicamente a la dinámica entre representados y representantes que debemos tomar en cuenta para entender cómo un sistema discursivo se mantiene cohesionado a través de los liderazgos, la ideología y su demandas.

Para aterrizar la dimensión de la *perspectiva de la tradición* necesitamos entender que “toda identidad política se constituye en referencia a un sistema temporal en el que la interpretación del pasado y la construcción del futuro deseado se conjugan para dotar de sentido a la acción presente” (Aboy Carlés, 2001). Esta dimensión se presenta como la más dinámica de las tres al proyectar como una triada la construcción de un discurso que busca en el pasado una plataforma para explicar el presente y proyectar un futuro movilizador a quienes se encuentran representados por cualquier identidad política dada. El pasado, el presente y el futuro son otros significantes vacíos que pueden ser resignificados permanentemente en cualquier sentido. No son eventos inamovibles y perennes, sino que también entran en el juego constructivista con el objetivo de dotar de sentido a la acción colectiva.

En adición a las anteriores tres dimensiones, incluiremos una dimensión analítica más a nuestro estudio que puede ayudar a complementar el entendimiento de la transformación de las identidades políticas, el lugar (*locus*) de enunciación. Como hemos elaborado hasta hora, desde el punto de vista de la teoría constructivista, la elaboración de un discurso implica considerar la capacidad performativa del lenguaje para construir realidades. Los discursos sociales y políticos tienen su base en el lenguaje para entrar en la disputa por el sentido que se le es dado a las cosas o a los eventos sociales. Pero al mismo tiempo, y en línea con los conceptos de lo social y lo político, existen condicionantes para que esos discursos pueden llegar a ser sistema dominantes en una sociedad. Así como lo social se concibe como un sedimento de prácticas constituidas que hacen que las resignificaciones no partan desde cero sino se encuentren con significaciones previas que se han ido consolidando, el *lugar de enunciación* también deberá ser tomado en cuenta como un condicionante adicional para la construcción de una identidad. Este *locus* no es un lugar físico, sino una posición dentro de la red que implica el campo de la discursividad. Este condiciona, es decir puede privilegiar y/o limitar la proyección del mensaje, así como la construcción de relaciones de resignificación, hacia adentro y afuera, de una identidad social dada. Esto nos quiere decir que debemos prestar atención también desde dónde los discursos son pronunciados y entender las

características y significaciones de ese *lugar* para entender el impacto que pudieran tener al momento de construir discurso político.

Esta propuesta metodológica no tiene pretensiones universalistas puesto que la dinámica que se está analizando es un ámbito complejo al que debe ajustarse siempre al contexto dentro de cada caso concreto de estudio se desarrolla. Además, es necesario explicitar que las cuatro dimensiones descritas aquí de manera separada, en la realidad operan simultáneamente, retroalimentándose y articulándose de maneras diferentes para cada caso. En la siguiente sección daremos paso a aplicar estos conceptos y marco metodológico para el caso ecuatoriano y última etapa democrática desde finales de la década de los setenta del siglo XX.

Del retorno a la democracia al “que se vayan todos”

Desde febrero de 1972, en el Ecuador se instauró una dictadura militar que sacaría del poder al presidente constitucional José María Velasco Ibarra. Esta etapa dictatorial estaría dividida en dos etapas. La primera, encabezada por el General Guillermo Rodríguez Lara que establecería un gobierno con un programa “nacionalista y revolucionario” (Salvador Lara, 2010). En 1976, se produce un autogolpe de estado al interior del cuerpo militar para derrocar a Rodríguez Lara y establecer un triunvirato militar o Consejo Supremo de Gobierno conformado por un representante de cada una de las tres ramas del ejército nacional. Este *triumvirato militar* permanecería en el poder hasta 1979, luego de un proceso de restablecimiento democrático en conjunto con la mayoría de las fuerzas políticas tutelado por el Triunvirato militar.

Ahora bien, esta etapa dictatorial militar de aproximadamente 7 años mantuvo unas características particulares en el plano económico y político que marcaran su relación con los diferentes sectores políticos del país y marcarían el devenir de la siguiente etapa democrática. En el plano económico, hay que mencionar, principalmente, que el gobierno militar llegó a administrar el inicio de la explotación petrolera en la región amazónica del país. Este *boom petrolero* permitió al Rodríguez plantear su programa nacionalista y revolucionario concretado en un proceso de estatización del petróleo, una incipiente industrialización, seguir avanzando en el proceso de reforma agraria (iniciado en la década anterior casualmente por otro gobierno militar entre 1963 y 1966) y planteando un proceso tecnocrático de modernización que ubicada al Estado en el centro del proceso (Montúfar, 2000).

Es a través de este nuevo modelo desarrollista que, a pesar de la permanente represión y persecución a la militancia de izquierda en el Ecuador, hubo grupos de este sector que veían

con buenos ojos el programa económico del gobierno militar, especialmente el Partido Comunista del Ecuador (PC), al contrario de la posición más beligerante que tomaron algunos sectores del socialismo nacional (Rodas Chaves, 2000). Al mismo tiempo, los sectores conservadores del país no veían con buenos ojos las pretensiones nacionalistas y redistributivas de Rodríguez Lara, realizando una fuerte oposición a su avance en diferentes campos (Montúfar, 2000).

Todo esto plantea unas relaciones de alteridad que ubican al Estado militar en medio de la disputa entre la izquierda y la derecha tradicional en el Ecuador por la repartición de los excedentes públicos debido al boom petrolero de esa década. Los principales representantes durante este periodo fueron los sindicatos obreros, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) o la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), más que los partidos de izquierda tradicional (el PCE y las diferentes facciones del socialismo). Aunque se debe tener en cuenta que estos partidos tenían cierta influencia y coordinación con varias centrales sindicales. De hecho, en noviembre de 1975 se produjo una huelga general en la que los puntos petitorios se convirtieron en apoyos para completar y avanzar en el programa de Rodríguez Lara, y en mayo 1977, ya con la Junta militar de gobierno, se produjo otra para reclamar por el viraje en la conducción económica nacionalista y redistributiva del Estado y que terminó siendo reprimida y sus dirigentes encarcelados (Rodas Chaves, 2000). Esto muestra que para el campo popular de izquierda las calles eran de los pocos espacios públicos donde podía expresar sus discursos públicamente a través de la movilización social. Es decir, su lugar de enunciación. El discurso de la mayoría de estas organizaciones gravitaba en torno a las diferentes vertientes del marxismo que desde décadas pasadas habían llegado al país desde Europa o Asia, especialmente la URSS y la China, pero también desde la propia región con experiencias más recientes, como la de la Revolución cubana y el Chile de Salvador Allende (Rodas Chaves, 2000). Resumiendo, la disputa por el relato del pasado, dependiendo de la agrupación, pivotaba principalmente en las experiencias revolucionarias de fuera de las fronteras del país andino, su aplicación al contexto ecuatoriano, pero todas acababan en un horizonte de reivindicación proletaria clásica. Esta fue la tónica general de la izquierda tradicional en el Ecuador en la década de los 70 y parte de los 80.

Por parte de las élites aparecieron como principales voceros las cámaras de producción. Esta situación provoca una dinámica corporativa de relacionamiento y disputa con el Estado (Barrera Guarderas, 2001). De hecho, el golpe de estado que depone a Rodríguez Lara y establece el Triunvirato militar en 1976 implica una presión de los sectores conservadores

que buscan un replanteamiento político para un repliegue del Estado por parte del gobierno militar. El siguiente objetivo era regresar a una nueva etapa democrática, para lo cual buscaron el consenso de la mayoría de sectores políticos (Salvador Lara, 2010), constituyendo comisiones de notables civiles para la elaboración de una nueva constitución de la república y las leyes pertinentes para referéndum, partidos y elecciones. A diferencia del campo de izquierdas, el campo conservador de derecha poseía más libertad y diversos lugares de enunciación para difundir su discurso.

En enero de 1978 se convocó a un referéndum nacional para consultar cual texto constitucional será el que se utilice para la nueva etapa democrática a la vista. Las opciones planteadas fueron el volver a la Constitución de 1945 reformada o un nuevo texto constitucional preparado por la comisión jurídica. Para junio de 1978 se celebraron nuevamente elecciones democráticas para elegir al nuevo binomio presidencial. La segunda vuelta se llevó a cabo en abril de 1979, donde resultó ganador el binomio de centro izquierda formado por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado frente al binomio conservador demócratacristiano de Sixto Durán Ballén y Jorge Icaza.

El nuevo momento democrático en Ecuador no solo comenzaba con la reiniciación del un proceso electoral. El gobierno militar se propuso también dejar cimentada una nueva institucionalidad política para articular la gobernabilidad futura del país. El centro de esta nueva institucionalidad deberían ser los partidos políticos como únicos representantes legítimos de la sociedad civil (Freidenberg & Alcántara Sáez, 2001). De esta forma permitía la modernización del sistema de partidos, dejando sin fuerza a partidos tradicionales como el conservador, el liberal, el “populista” CFP y el marxista FADI, y dando paso a otros más recientes como el Partido Social Cristiano (conservador neoliberal), la Democracia Popular (democracia cristiana), la Izquierda Democrática (socialdemocracia), el Partido Socialista y el Movimiento Popular Democrático (marxismo leninismo), por nombrar a los más relevantes (Salvador Lara, 2010).

Además de otras reformas institucionales que en el futuro casi inmediato permitirían la aparición y consolidación de nuevos actores políticos y sus discursos. Una de estas reformas sería la incorporación del voto facultativo. Reforma significativa para que los sectores indígenas comiencen su incorporación a la dinámica política del país (Freidenberg, 2003).

El nuevo gobierno progresista de Roldós-Hurtado retomó la senda desarrollista marcada por la primera parte de la dictadura militar, ubicando al Estado en el centro del proceso de

económico. Esto se plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo que incluyó 3 objetivos principales; desarrollo económico, justicia social y consolidación democrática (Salvador Lara, 2010) que se plasmarían en proyectos para el desarrollo rural, profundización de la reforma agraria, industrialización, expansión del mercado interno y fortalecimiento del tejido asociativo popular para ampliar el espectro de organizaciones que se beneficiaban de las lógicas corporativas existentes hasta al sector indígena y campesino también. (Barrera Guarderas, 2001; Montúfar, 2000).

La muerte del presidente Roldós en un accidente de aviación en mayo de 1981, el conflicto bélico con el Perú, la caída del precio del petróleo, el inicio de la crisis de la deuda externa en la región obligó a al gobierno nacional no solo a reducir sus expectativas reformistas redistributivas y de justicia social, sino que el gobierno del ahora presidente Hurtado comenzó un viraje en su política económica que solo se profundizaría la crisis. Hurtado, presionado por la situación económica y la oposición política de derecha, abrió el camino al neoliberalismo al aplicar medidas de ajuste estructural a la economía ecuatoriana, como la reducción de subsidios públicos, la renegociación de la deuda externa, la devaluación de la moneda nacional (el Sucre) o la nacionalización de la deuda externa privada (Barrera Guarderas, 2001).

El campo popular de izquierda en este periodo comenzó con un alineamiento y apoyo al programa redistributivo de Roldós, pero a medida que la situación económica empujaba al gobierno a replegar sus objetivos y más aún con Hurtado de presidente, los sindicatos se lanzaron a las calles a protestar contra el gobierno. Hubo 5 huelgas generales entre 1981 y 1983 lideradas por el FUT, siendo la de 1981 en apoyo político a Roldós y las siguientes en franca oposición a las nuevas políticas gubernamentales. La última huelga, en marzo de 1983, el inicio del declive de esa capacidad de movilización del FUT y otros sindicatos (Barrera Guarderas, 2001). En este lapso, los partidos de izquierda que obtuvieron alguna representación parlamentaria fueron diluyéndose por el nuevo entramado institucional dejado por la dictadura que los arrinconaba. Aunque es importante mencionar que en 1983 se derogó los artículos de la Ley de partidos en las que se defenestraban al partido comunista, que luego se transformaría a Frente Amplio de Izquierda (FADI) y al Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Lo que permitió que desde finales de ese año todas las facciones socialistas comenzaran su reunificación dentro del PSE (Rodas Chaves, 2000). El PSE será el único partido de izquierda tradicional que llegará activo a la segunda década del siglo XXI.

El proceso de modernización del sistema político ecuatoriano había logrado que el discurso político de la izquierda se vaya difuminando dentro del sistema de partidos, el gobierno y las calles para mediados de la década de los 80. Mientras tanto, la derecha política logró reagruparse detrás de la figura de León Febres Cordero y el PSC, que lograría captar la presidencia de la República en 1984. Desde el Congreso Nacional, Febres Cordero fue el mayor opositor político de Hurtado. Con su gobierno inicia la cooptación del Estado por parte de la derecha política y la transforma en su principal locus de enunciación. El gobierno de Febres Cordero además significa la consolidación de la transformación de la derecha tradicional en otra más moderna alrededor del discurso neoliberal en América Latina, terminando por sepultar los intentos de establecer al Estado como el eje central de representación política, desarrollo y redistribución de la riqueza iniciados con la dictadura militar y el gobierno de Roldós. El único significativo que de alguna manera permaneció fue el de normalidad democrática. Esto fue uno de los factores determinante para el rezago de la izquierda tradicional cuando su discurso que construyó su identidad política en la década de los 70 frente a gobiernos dictatoriales, en línea con lo que sucedía en otros países de la región. Al retornar la democracia al país, uno de sus principales significantes y contrincantes quedó desactivado, mientras eran incapaces de renovar su discurso de izquierda (Rodas Chaves, 2000).

El gobierno de León Febres Cordero fue fundamental también para cambiar las relaciones de alteridad con la izquierda, creando nuevos significantes para el futuro del campo popular. Desde 1983 se crean movimientos de izquierda revolucionarios que ponen sobre la mesa la lucha armada como alternativa para lograr el poder y un horizonte reivindicativo del campo popular. Alfaro Vive Carajo (AVC) y Montoneras Patria Libre (MPL) fueron dos organizaciones que se enfrentaron directamente al gobierno conservador de Febres Cordero y que este respondió con una represión desmedida, asesinando a varios de sus dirigentes y otros líderes sociales de la época mediante una estructura de represión policial a través de un discurso autoritario y populista. El caso más representativo de la época fue el de los hermanos Restrepo, dos jóvenes hermanos menores de edad que fueron secuestrados por uno de estos escuadrones policiales, torturados y luego asesinados en circunstancias inciertas hasta el día de hoy. Los crímenes de Estado cometidos por los aparatos de seguridad del gobierno de León Febres Cordero crearon un nuevo significativo que gravitó fuertemente al campo progresista y popular en las siguientes dos décadas, que fue la defensa de los derechos humanos. Relevante fue el rol que tuvo la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

(CEDHU), organización de la sociedad civil que mantuvo un fuerte presencia en las siguientes dos décadas dentro de las organizaciones del campo popular acompañando a las familias con casos de abusos de derechos humanos en el Ecuador. Su trabajo se podría resumir en su lema “justicia, verdad y reparación”¹.

Los resultados electorales de los partidos políticos de izquierda tradicional (PSE, FADI y MPD) fueron marginales. Sus pocos escaños se agruparon con el bloque de la centro izquierda (ID, DP y PRE) para construir la oposición progresista al gobierno de Febres Cordero que profundizó el desmantelamiento del Estado y las acusaciones de corrupción (Rodas Chaves, 2000). El ocaso del discurso de la izquierda tradicional se volvía cada vez más evidente en su capacidad de representación social, pero es durante esta misma década que comenzaría a consolidarse un nuevo actor con proyección nacional que lograría no solo representar a espacios importantes del campo popular y progresista ecuatoriano, sino también ocupar sus lugares de enunciación para revitalizarlos de legitimidad en las siguientes décadas. Nos referimos al Movimiento Indígena del Ecuador (MIE) y a su organización política más importante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La CONAIE es una organización que agrupa a la mayoría de las organizaciones indígenas regionales del Ecuador. Fue fundada en 1986, pero este evento es la culminación de un proceso de organización política de décadas previas desde las bases y comunidades indígenas, especialmente en las zonas rurales del Ecuador. El impacto político de la CONAIE se va a sentir en los cuatro criterios elegidos para entender la evolución de las identidades políticas que hemos descrito anteriormente. Va a cambiar las relaciones de alteridad con la derecha política neoliberal y el Estado, se constituirán en un actor de representación más amplio que la población indígena, su discurso histórico abandonará el marxismo para partir de las luchas indígenas de 500 años, y renovará la forma de usar el locus de enunciación desde la movilización social con grandes marchas indígenas que avanzarán hacia las capitales de provincia y de la república.

Las problemáticas del mundo indígena tenían raíces mucho más profundas que la mirada de clase del marxismo y que apuntaban directamente a la conquista española y el rol que los y las indígenas tuvieron desde la época colonial y la vida republicana del Ecuador. La extrema pobreza, el racismo, la exclusión política eran las condiciones sociales en la cual este sector había vivido por siglos. Si bien desde la década de los 40 existieron intentos de

¹ Para más información sobre el CEDHU, visitar: <http://cedhu.org/cedhu>

representación política del sector indígena, estos no fueron autónomos ya que sus demandas eran mediadas por las estructuras del Partido Socialista o el Partido Comunista (PC). Por ejemplo, la Federación ecuatoriana de indios (FEI), una de las organizaciones indígenas más antiguas, fue creada en 1944 con la ayuda del PC. Desde las década de los 70 y 80 es cuando las organizaciones indígenas crean voces propias, como la ECUARUNARI (Confederación de pueblos Kichwas de la Sierra) en 1972 o la CONFENAIE (Confederación de pueblos indios de la Amazonía) en 1980, y que terminan en la constitución de la CONAIE como vocería a nivel nacional poniendo sobre la mesa demandas colectivas articuladas como el acceso a la tierra, el extractivismo, la plurinacionalidad del Estado o los derechos colectivos de sus comunidades.

Es a finales de mayo y principios de junio 1990, en medio del gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja, que la CONAIE hace su primera gran aparición a nivel nacional con el denominado Levantamiento del Inti Raymi. Este comenzó con la toma de la iglesia de Santo Domingo en pleno centro histórico de Quito y que fueron secundadas por movilizaciones masivas indígenas en carreteras y capitales de provincias de los Andes centrales (Barrera Guarderas, 2001). Su pliego petitorio de 16 puntos (Mandato por la vida) incluían demandas étnicas, ciudadanas y de clase, especialmente en clave campesina por temas de conflictos de tierra (Altmann, 2017). Al gobierno, como al resto del país, le tomó por sorpresa este evento que terminó con este en mesas de diálogo con algunas concesiones concretas al movimiento indígena, pero que en el plano simbólico marcarían el inicio de un ciclo de movilizaciones populares con un protagonismo fundamental de la CONAIE en la próxima década y media.

En los siguientes años el movimiento indígena continuó manifestándose masivamente contra los gobiernos de turno que, más allá del color ideológico, continuaban profundizando el neoliberalismo en Ecuador afectando a las clases medias y populares con medidas que provocaron el incremento de la pobreza y la desigualdad. Son importantes los levantamientos de 1992 a razón de los 500 años de resistencia indígena y en 1994 contra las políticas agrarias del presidente conservador Sixto Durán Ballén. Estos eventos provocaron una discusión al interna de la CONAIE sobre la necesidad de constituir un movimiento político que participe dentro del sistema electoral y que pueda constituirse como la organización que proyecte el discurso político de la CONAIE a nivel de partidos. Este proyecto fue desarrollado en un documento por la CONAIE e incluía puntos sobre la necesidad de una nueva Constitución Política, consolidación de la autonomía y derecho indígena, reforma agraria, educación y salud Intercultural y un nuevo modelo económico comunitario ecológico planificado

(CONAIE, 1994). Esa discusión concluyó, en conjunto con otros movimientos sociales, en la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) a finales de 1995.

Pachakutik entra en escena para ocupar nuevos lugares de enunciación institucionales, como el Congreso Nacional o gobiernos locales, que habían dejado vacíos los antiguos partidos de izquierda tradicional, cada vez más minoritarios en términos electorales desde finales de la década pasada. El cambio de época vivido desde la década de los 80 había sido duro para la izquierda tradicional, no solo por el rol marginal que la nueva institucionalidad democrática les había dejado, sino por la deriva del socialismo real en el mundo, especialmente en la URSS. El discurso de clase desde los partidos y sindicatos cada vez era menos llamativo y movilizador para las nuevas generaciones.

Con este nuevo brazo político, el movimiento indígena da un paso más para ser uno de los representantes políticos, no solo de la defensa del medio ambiente, la interculturalidad y plurinacionalidad, la autonomía de los territorios sino además del rechazo al modelo neoliberal y la corrupción posibilitando el espacio para nuevas demandas y movimientos sociales demandas sociales (Freidenberg & Alcántara Sáez, 2001). Para las elecciones presidenciales de 1996, aunque no con candidatos propios, apoyan una alianza para el binomio de centro izquierda Ehlers-Vinueza y logran un resultado histórico al quedar en tercer lugar, cerca de entrar al balotaje, superando a formaciones con mucha más historia, como la Democracia Popular.

En este sentido, las relaciones de alteridad en el Ecuador desde mediados de los 80 se centran en un frente renovado que va construyéndose en el campo popular progresista (izquierda) contra otro campo conservador neoliberal (derecha). Como lo mencionamos anteriormente, el campo conservador inicia un proceso de modernización de la mano del PSC y León Febres Cordero. A partir de 1984, más allá de los colores del partido de gobierno, el neoliberalismo sería implantado como el discurso de Estado, en versiones más gradualistas o más radicales, de manera consecutiva hasta el año 2006. De esto modo, desde la otra orilla, en el campo popular se da pasó a esta renovación de su identidad política de la mano del MIE que se convierte en la década de los 90 en el representante principal del campo popular progresista tratando de sumar a otros movimientos sociales y partidos políticos de centro izquierda socialdemócratas de tercera vía, como la Izquierda Democrática, o de rezagos socialistas como el PSE.

Ecuador a mediados de los 90 entraría en una vorágine de conflictividad política y social que duraría más de una década. Empezando con el golpe de estado al presidente Abdalá Bucaram en 1997 (estando solo 6 meses en funciones), el golpe de estado al presidente Jamil Mahuad en enero de 2000, y un tercer golpe de estado en el año 2005 al presidente Lucio Gutiérrez. Entre medias, se sucedieron la Asamblea constituyente de 1998, la instalación de una base militar estadounidense en el puerto de Manta, la crisis bancaria que acabaría en el congelamiento de los depósitos bancarios (feriado bancario) en todo el país en marzo de 1999 y la dolarización oficial de la economía en enero del año 2000. En este sentido, el discurso neoliberal construido desde el Estado por los sectores oligárquicos, en contraposición al discurso desarrollista nacionalista de la etapa anterior, habían prometido prosperidad y progreso, pero terminaron por generar mayores tasas de pobreza, desigualdad y una crisis de gobernabilidad y representación nunca antes vista en el país. Entre 1981 y el año 2000, la pobreza y la extrema pobreza² se habían duplicado, alcanzando picos del 50% y del 28%, respectivamente. La institucionalidad construida con los criterios de liberalización financiera³ tuvieron como resultado la peor crisis bancaria del país, obligando al Estado ecuatoriano a garantizar en última instancia los depósitos de los cuenta ahorristas damnificados por el cierre masivo de bancos.

Durante estos años es cuando el movimiento indígena logra articular logros tanto en el plano de la movilización y la protesta social, así como dentro de la institucionalidad pública del Estado. Fue un actor relevante en la caída del presidente Bucaram y fue el principal protagonista de los levantamientos que derivaron en la salida del presidente Mahuad en 2000. Pero sus logros en el plano institucional no fueron menores. A más de lograr alcanzar dignidades públicas en gobiernos locales y escaños legislativos, también lograron integrar varios puntos de su proyecto político en la redacción de la Constitución de la República de 1998.

La “Constitución del 98” fue la culminación definitiva de la institucionalidad neoliberal en el Ecuador debido a la correlación de fuerzas en esa asamblea constituyente. Con esto se sepultó el horizonte desarrollista y de centralidad estatal en la vida económica del país que había dejado en ciernes la dictadura militar. A pesar de esto, Pachakutik, con 10 escaños de 70,

² Todos los datos económicos son tomados de la página Our World In Data con fuente en el Banco Mundial: <https://ourworldindata.org/extreme-poverty>. Visto el 29 junio 2022.

³ La Ley general de Instituciones del sistema financiero, promulgada en 1994, abrió la puerta a la desregulación del sistema financiero nacional que terminó en el cierre, solo en 1998 y 1999, de 28 entidades bancarias por malos manejos de recursos.

logró que se incluya dentro del texto final temas referentes a derechos civiles y colectivos que significaron avances importantes para varios sectores sociales (Freidenberg & Alcántara Sáez, 2001). Para el año 2002, Pachakutik lograría su mayor logro político, en clave de representación electoral, cuando para las elecciones presidenciales de ese año, en alianza con otros sectores políticos, logra catapultar a la presidencia al ex militar Lucio Gutiérrez frente al empresario millonario Álvaro Noboa, carta del campo oligárquico neoliberal .

Paradójicamente, su mayor logro político se convirtió también en el punto de inflexión de su caída, como lo veremos más adelante. El neoliberalismo como discurso hegemónico en la política ecuatoriana llegaba a un punto de no retorno con la crisis financiera suscitada entre 1998 y 2000. Fue la mayor crisis económica de la historia del país que empobreció rápidamente a la sociedad ecuatoriana y fue causante de un éxodo migratorio mayúsculo hacia los EE. UU. y Europa. La sumisión de la política económica a organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, privilegiando el pago de la deuda a la inversión pública o la alineación geopolítica con los EE. UU. permitiendo la instalación de una base militar en territorio nacional, empezó a causar mucho descontento social con las oligarquías neoliberales que seguían ocupando el Estado a pesar de la inestabilidad.

Es así como, sectores sociales y políticos, especialmente aquellos involucrados en el levantamiento popular que acabó con la salida del presidente Jamil Mahuad en enero del 2000, apoyaron la candidatura del coronel Lucio Gutiérrez. El apoyo del MIE y de Pachakutik fue fundamental para galvanizar una candidatura de centro izquierda que abarque diferentes demandas sociales, pero especialmente que enfrente al discurso neoliberal y rescate la soberanía nacional (Kintto, 2015). Pero pronto esa ilusión que encarnó en el campo popular progresista se diluyó. Gutiérrez, como presidente, buscó alianzas de gobernabilidad con sectores oligárquicos entregando la conducción económica a cuadros cercanos a los partidos neoliberales que ya habían gobernado antes el país, mientras que carteras puntuales como Cancillería o Agricultura y Ganadería fueron entregados a miembros del MIE.

El "gobierno de la gente", como definió su proyecto el mismo Gutiérrez, se convirtió muy pronto en el "mejor aliado de los Estados Unidos" (Kintto, 2015). Este viraje significó, además, la continuidad de acuerdos de financiamiento con el FMI y cumplir sus condicionamientos, como la privatización del sector eléctrico, la eliminación de subsidios a derivados del petróleo y priorizar el pago de la deuda externa a la inversión pública. Además, los EE. UU. seguían presionando al Ecuador y otros países de la región para participar más

activamente en el conflicto armado colombiano a través del Plan Colombia y la creación del área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En otras palabras, el discurso neoliberal encontraba maneras de mantenerse dentro del Estado, más allá ocupar otros lugares de enunciación (cámaras empresariales o medios de comunicación) y así continuar con su construcción institucional a pesar de una hegemonía que venía erosionándose desde el cambio de siglo.

Por estos motivos la CONAIE le retira el apoyo político al gobierno del presidente Gutiérrez solo 6 meses después de iniciar su periodo de gobierno, aunque algunos cuadros de PK se mantienen dentro del gobierno entrando en la lógica política de los partidos tradicionales en el Congreso Nacional. Esto hace visible una ruptura entre partido y movimiento que se venía gestando desde hace algún tiempo (Kintto, 2015).

Al igual que sus predecesores, el desencanto de varios sectores sociales, incluidos varios pertenecientes al campo oligárquico, con el gobierno de Gutiérrez fue creciendo y en abril de 2005 nuevas protestas sociales terminaron en nuevo golpe de estado que dejó fuera a Gutiérrez y como presidente interino (hasta finalizar el periodo en 2007), al hasta entonces vicepresidente, Alfredo Palacio. En esta oportunidad, la CONAIE no tuvo una participación tan importante como en anteriores ocasiones. Más bien desde el campo popular, fueron sectores urbanos y movimientos progresistas, especialmente de Quito, los que lideraron las protestas conocidas como la “Rebelión de los forajidos” (Kintto, 2015).

La rebelión de los forajidos puede tomarse como el punto más alto de la crisis de representatividad que llegó a tener el Ecuador. El “que se vayan todos” que se gritaba en las calles expresaba el hartazgo de la ciudadanía con toda la clase política y el sistema democrático que los acogía. La crisis hegemónica del discurso neoliberal y del campo oligárquico tocaba un nuevo fondo, pero esta vez se llevaba consigo también al campo popular progresista y su principal representante, el MIE, por ser incapaz de llevar a cabo una agenda antineoliberal y soberana cuando se le dio la oportunidad de llegar al gobierno. El campo popular progresista, a pesar de que construía un discurso cada vez más sólido frente a un adversario en declive, quedaba en la orfandad política sin liderazgos claros que los representen y con unas elecciones a poco más de un año de distancia.

Alfredo Palacio moduló el programa neoliberal en su gobierno manifestando que los recursos petroleros deben servir primero para inversión social y defender dentro el marco de la ley al Ecuador frente a demandas internacionales de petroleras extranjeras (Occidental Petroleum -

OXY). Aunque también mantuvo promesas de mantener las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE. UU. y no tocar el convenio con los EE.UU. sobre la Base de Manta (Kintto, 2015). Para las elecciones del último trimestre de 2006 el campo popular progresista y el campo oligárquico neoliberal como identidades políticas llegaban a enfrentar dos discursos, pero sin representantes políticos claros.

Antes de cerrar este segmento, resumamos lo que ha sido la transformación de las identidades políticas del campo popular progresista en esta primera etapa entre 1979 y 2006. La transición política desde la dictadura militar hacia la democracia encontró al campo popular progresista en sus relaciones de alteridad en una disputa contra el autoritarismo de los militares, aunque defendiendo su vocación nacionalista de desarrollo. En la nueva etapa democrática, su contraparte política cambiará, o más bien, retornará de frente hacia el campo oligárquico en proceso de modernización neoliberal. Las dinámicas de representación también tuvieron que cambiar al bloquear a los caudillos populistas clásicos (Velasco Ibarra y Asad Bucaram) para dar paso a una renovación que tomaría mucho tiempo luego de la muerte del presidente Jaime Roldós en 1981. La década de los 80 fue testigo de como los partidos de izquierda tradicionales y sindicatos fueron perdiendo capacidad de convocatoria con discursos anclados en el marxismo clásico. Estos actores incluso fueron dejando vacío sus lugares de enunciación tradicionales, como lo fue “la calle” al ir perdiendo capacidad de movilización social para la protesta y, en el plano electoral, al dejar de tener peso en el plano institucional, especialmente en el legislativo.

La década de los 90 fue testigo del inicio de la modernización del discurso del campo popular progresista de la mano de un nuevo actor, el Movimiento Indígena del Ecuador. Las relaciones de alteridad con el campo oligárquico neoliberal dominando el Estado como su principal locus de enunciación. El MIE, y especialmente la CONAIE, se fueron convirtiendo en el representante principal del campo popular (lógica de la equivalencia) renovando el discurso político al abandonar el marxismo como punto de partida principal de su tradición, nutriendo de nuevos significantes que nacían de las luchas indígenas de siglos (Ej.: plurinacionalidad, interculturalidad, autonomía). Esto permitió que nuevos movimientos sociales, como ambientalistas, feministas o de defensa de los derechos humanos puedan tener una voz propia en política.

Para terminar esta recapitulación, el cambio de siglo es el escenario de la crisis de representación estructural en el Ecuador. El campo oligárquico neoliberal dilapidaba su

discurso al explicitarse su fracaso político y económico que llevó al país a la bancarrota y al alineamiento geopolítico con los EE. UU. sin reparo del daño en la soberanía nacional. En frente nos encontramos con una oportunidad perdida para el campo popular, y especialmente el MIE, que luego de construir un liderazgo político y moral en el país durante más de una década aupó al poder y fue parte de uno de los gobiernos peor valorados en la última etapa democrática. Las demandas por salud, educación, redistribución de la riqueza, soberanía nacional, entre otros, se aglutinaban en el campo popular progresista, pero sin que exista algún liderazgo suficiente para encarnar nuevamente esa pugna frente a un campo oligárquico que se negaba retroceder. El neoliberalismo, a pesar de sus fracasos, seguía de pie y buscaba mantener su control del Estado como su principal locus de enunciación. Es este escenario el que, en el año 2006, posibilita la aparición de nuevas figuras que logran impulsar de una manera “inesperada” al campo popular progresista a un nuevo momento como identidad política.

La Revolución Ciudadana como identidad política “inesperada”

La crisis de representación en el Ecuador, como vimos en el recorrido anterior, había llegado a uno de sus picos más altos entrado el siglo XXI. El desencanto de la ciudadanía con el sistema democrático y la institucionalidad gubernamental tocaban máximo históricos. Según Latinobarómetro⁴, para el año 2005, el 45% de las personas encuestadas declaraba encontrarse *no muy satisfecho* con el funcionamiento de la democracia en el país. Para el mismo año, más de 90% de personas encuestadas declaró que *el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio* y no para el bien de todo el pueblo. La evaluación del Congreso Nacional era de mal o muy mala en un 91% para el 2006 y la aprobación de la gestión presidencial no pasaba del 25%.

En estas circunstancias políticas y sociales, una nueva cita electoral se preparaba en Ecuador para finales del año 2006. Varios actores del campo popular progresista se encontraban nuevamente tratando de articular frentes y discursos para enfrentar en el corto plazo la cita electoral. Así es como aparece un nuevo personaje que vendrá a resignificar la representación del campo popular en la siguiente década. Rafael Correa era en un académico, economista y profesor universitario que fue designado ministro de Economía y Finanzas por el presidente Alfredo Palacio. Durante los meses que ejerció este cargo tuvo una destacada gestión por sus posturas antineoliberales y nacionalistas que conectó con el espíritu “forajido” de 2005

⁴ Todos los datos fueron tomados de la web Corporación Latinobarómetro en: <https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>. Visto 04 julio 2002.

(Recalde, 2013). Es por estas posturas que el presidente Palacio lo mantuvo solo 4 meses en el cargo, pero fue tiempo suficiente para lograr resonancia política y que sectores de izquierda vieran en él un nuevo liderazgo que diera nueva voz a los significantes principales del campo popular progresista y recuperar su legitimidad en esos momentos.

El proceso de conformación de un frente electoral unitario progresista no iba a ser fácil. Varios sectores sociales y de intelectuales de izquierda impulsaron a Rafael Correa como candidato presidencial y buscaron tejer alianzas con diferentes sectores y partidos políticos, especialmente con el MIE, pero este último decidió ir en solitario con candidaturas propias, tratando de no cometer el mismo error que cometieron al confiar en Gutiérrez en la elección pasada (Kintto, 2015).

Los movimientos sociales que patrocinaron la candidatura de Rafael Correa se aglutinaron en un movimiento denominado Alianza País (AP). El objetivo era conformar un gran frente unitario de izquierda, incluyendo al MIE, para poder enfrentar a la candidatura más fuerte del campo oligárquico neoliberal, el empresario bananero Álvaro Noboa, quién había quedado en segundo lugar las elecciones pasadas. Con este horizonte, Rafael Correa y AP lograron estructurar un discurso que recogiera las principales demandas y reclamos de varios sectores sociales del Ecuador. Esto se plasmó directamente en el Plan de gobierno que AP construyó con varias organizaciones sociales, denominado “*¡Porque otro país es posible! Un primer gran paso para la transformación radical del Ecuador*”. Documento construido colectivamente y presentado previo al proceso electoral. Entre las principales propuestas de esta denominada *Revolución Ciudadana* se encontraba una gestión económica que devuelva protagonismo al Estado, defensa de derechos laborales, defensa de los recursos naturales del país, lucha contra la corrupción, así como no aceptar más imposiciones desde el FMI o el Banco Mundial (Alianza País, 2006). Cabe destacar las propuestas para realizar una auditoría de la deuda externa, la no renovación del convenio con los EE. UU. sobre la base de Manta, la no presentación de candidaturas para el legislativo ya que el horizonte era convocar inmediatamente a una Asamblea Constituyente de plenos poderes para reformar la institucionalidad del Estado. Todas estas propuestas apuntaban directamente a representar, no solo el discurso del campo popular progresista sino el de amplios sectores de la sociedad. Lo que el país pedía con el “que se vayan todos” era una transformación radical del país.

Por otra parte, aunque el MIE compartía muchas de las demandas y propuestas que desde el campo popular progresista se levantaban (inclusive la de convocar a una Asamblea

Constituyente), no lograron ampliar su capacidad de representación a otros sectores. Su propuesta se centraba en la creación de un Frente intercultural de izquierda liderado por un candidato propio del MIE. Para la segunda vuelta electoral se enfrentarían Rafael Correa contra Álvaro Noboa. Luis Macas, líder histórico de la CONAIE y candidato presidencial por PK, obtuvo poco más del 2% de votos en primera vuelta. Eventualmente, el MIE y otros partidos de izquierda que no se habían agrupado en AP o apoyaron a Rafael Correa en la primera vuelta, lo hicieron para el balotaje electoral donde finalmente vencieron al candidato de la derecha oligárquica.

Este fue el inicio de una de las transformaciones más grandes dentro de la identidad política popular progresista en Ecuador. La disputa por la representación política de los significantes más importantes dentro del discurso de izquierda y el cambio en las relaciones de alteridad, en las que el adversario dejaría de ser solo el la oligarquía neoliberal sino además el proyecto político de la Revolución Ciudadana (RC), como veremos más adelante. Asimismo, la perspectiva de la tradición daría un nuevo vuelco ya que la RC asumiría un nuevo punto de referencia histórico para referenciar sus mitos políticos. Nos referimos a la Revolución Liberal Alfarista de finales de siglo XIX y a su líder, el General Eloy Alfaro, y en el plano internacional, se plegaría al bolivarianismo como eje para la unidad regional de América Latina.

Pero el cambio más importante que se dará a partir de estas elecciones y que transformará a todas la identidades políticas en los años próximos es el cambio del lugar de enunciación del campo popular progresista con la RC. La llegada al palacio de Carondelet de Rafael Correa significó que la izquierda regresara al gobernar luego de 26 años, siendo Jaime Roldós su última figura en el cargo. Esto además implicaría que el discurso del campo popular progresista podría irradiarse ya no solo desde las calles y la organización social sino desde el Estado. Es decir, no solo poder decir sino multiplicar su capacidad de hacer. Esto no solo tendría implicaciones dentro del discurso de izquierda, sino también y especialmente en el campo oligárquico neoliberal que se vería despojado de su principal lugar de enunciación, obligándose a replegarse hacia los medios de comunicación, *think tanks* de derecha y las cámaras empresariales.

La presidencia de Rafael Correa inició cumpliendo sus principales ofrecimientos de campaña firmando el decreto presidencial para una consulta popular para decidir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que redacte una nueva Constitución

Política de la República. Luego vendrá una convocatoria a elecciones para asambleístas constituyentes que sesionarían entre finales de 2007 y mediados de 2008. AP se haría con la mayoría absoluta de los escaños para esa Asamblea. El resultado final fue una nueva Constitución de la República o “Constitución de Montecristi”. Denominada así por ser esta localidad donde se ubicó el recinto que acogió la Asamblea Constituyente. Montecristi es un cantón costero y lugar natal del general Eloy Alfaro. En este lugar se construyó también un mausoleo para ubicar los restos mortuorios de Alfaro, materializando así el mito fundacional de la Revolución Ciudadana, haciendo hincapié en la figura y legado de este en la historia de la república.

Vale mencionar que durante el primer año de mandato de Rafael Correa también se decretó la creación de dos comisiones importantes. La primera fue la Comisión de la Verdad que se encargaría de investigar las vulneraciones a los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano desde 1984 hasta 2007. Es decir, desde el gobierno de León Febres Cordero hasta la actualidad. A la cabeza estaría la hermana Elsie Monge, activista de larga data e integrante de la CEDHU. Su informe final “Sin verdad no hay justicia” (Comisión de la Verdad, 2010) fue presentado en el año 2010. La segunda sería la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que tendría como objetivo auditar los convenios, contratos y créditos adquiridos por el sector público ecuatoriano desde 1976 hasta 2006 con el fin de determinar la legitimidad, legalidad y transparencia de estos. Entregó su informe final (CAIC, 2008) en 2008 lo que permitió al gobierno ecuatoriano renegociar y aliviar aproximadamente un tercio de su deuda externa en 3 200 millones de USD⁵ aproximadamente.

La Constitución de Montecristi significó desterrar al discurso neoliberal institucionalizado en la Constitución de 1998. En la actual Constitución se ubicó nuevamente al Estado como ente protagónico en el desarrollo económico y social del país al ser garante de derechos de toda la ciudadanía (art. 3) y se remarcó el carácter plurinacional e intercultural del Ecuador (art. 1), pero, además, se introdujeron reformas vanguardistas para la época como los derechos de la naturaleza (Cap. VII) y el régimen de desarrollo basado en la visión de bienestar de los pueblos andinos, el Sumak Kawsay o Buen Vivir (art. 275). Es interesante revisar el preámbulo de la nueva carta magna porque recoge los principales significantes populares y progresistas de las últimas décadas y que marcarían la nueva etapa política del país andino:

“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador

⁵ Reuters (13 septiembre de 2009). ‘La renegociación de la deuda ecuatoriana asombró a un Nobel’. El Comercio. <https://bit.ly/3liMPF0>. Visto 05 julio 2022.

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos,

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia,

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad,

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad,

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo,

Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,

Decidimos construir

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades;

Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana -sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente.”

Aunque la Asamblea Constituyente fue el punto de más unidad dentro del campo popular progresista en 25 años (lógica equivalencial) frente a la “partidocracia”⁶, pero también fue el inicio de quiebres profundos dentro del mismo ya que empezaron a hacerse cada vez más visibles las diferencias de proyectos entre la RC y el MIE. Más allá de los puntos discursivos en los que coincidían, también existían otros sobre los cuales existían diferencias importantes. Durante los debates constituyentes, el tema sobre el extractivismo fue un punto de ruptura que alejó las orillas entre estos dos actores. Mientras la RC buscaba un nuevo modelo de gestión y regulación minera, el MIE se oponía completamente a la minería a cielo abierto y gran escala debido a los efectos contaminantes y especialmente porque ocurriría dentro de sus territorios ancestrales (Martínez Abarca, 2010). Pero el extractivismo solo fue uno de varias fracturas que se fueron abriendo con el MIE y otros actores sociales, como también los fueron la concepción de la interculturalidad, la gestión de la movilización social, la política agraria y la descorporativización del Estado (Lalander & Ospina Peralta, 2012).

⁶ “Partidocracia” fue el significante elegido por Rafael Correa y la RC para describir a toda la clase política que causó la crisis económica, política y social en el Ecuador previo a 2007. Esta no solo incluye a actores del campo oligárquico neoliberal sino también del campo popular progresista.

La relación con el MIE y diferentes movimientos sociales fue desgastándose con rapidez especialmente por el tema de la gestión de la movilización social y la descorporativización del Estado. Sobre el primero, sobra decir que la conflictividad social posterior a la aprobación de la nueva Constitución fue más elevada que en años previos. Según las cifras del Centro Andino de Acción Popular, citadas por Ramírez y Stoessel, entre 2006 y 2009 la frecuencia de conflictos sociopolíticos no pasaba de 400 episodios por año, pero en el año 2010 estos eventos ascendieron hasta los 881, 783 en 2011 y 713 en 2012 (Ramírez & Stoessel, 2015). La visión más desarrollista de Rafael Correa chocaba con la visión más ambientalista y de defensa de los territorios del MIE. En este sentido, Correa manifestó muchas veces su oposición al "izquierdismo y ecologismo infantil" de varios sectores sociales que en un principio apoyó a la RC. A causa de estas conflictos hubo cientos de enjuiciados, algunos con acusaciones de terrorismo y sabotaje (Lalander & Ospina Peralta, 2012). La judicialización de la protesta social contra dirigentes sociales, especialmente del movimiento indígena, fue un hito que marcaría el futuro de distancia entre la RC y el MIE. En otras palabras, para la RC estas posturas significaban un bloqueo para llevar a cabo su proyecto y los ubicaba junto con el resto del bloque oligárquico neoliberal.

Sobre la descorporativización del Estado hay que entender que era una de las propuestas de gobierno de Rafael Correa. El objetivo principal era recuperar las capacidades de planificación, regulación y control del Estado que durante las décadas pasadas habían sido cooptadas por el sector privado (léase: superintendencias, banca pública, el Banco Central, etc.). Dentro de estas cooptaciones también se encontraba el propio MIE, que durante años había logrado negociar con diferentes gobiernos espacios de poder en la administración pública. Los principales ejemplos serían la Dirección Nacional de educación intercultural bilingüe (DINEIB), la Dirección de Salud Indígena o el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). Durante el proceso de transformación del Estado llevado a cabo por la RC, todas estas instancias dejarían de estar bajo control del MIE para pasar a estar adscritas a la estructura del Estado y sus correspondientes ministerios (Ospina Peralta, 2009).

La etapa post constituyente, a partir del año 2009, implica que el campo popular progresista comienza a definirse en cada vez más espacios discursivos separados entre la Revolución Ciudadana y los movimientos sociales. Tanto que estos se convertían también en oposición política a Rafael Correa y su gobierno. Todo esto mientras el campo oligárquico neoliberal comenzaba una etapa de regeneración lejos del Estado como su locus principal y rearticulando

su discurso sobre nuevos significantes y con una relación de alteridad centrada en un adversario más actual, la RC, que significó una amenaza al estatus quo neoliberal. Rafael Correa había logrado, luego de más de dos décadas, poner en cuestión el sentido común que el neoliberalismo había construido. Y lo había logrado no solo con sus discursos hablados remarcando las consecuencias de “la larga noche neoliberal”⁷, sino por los acciones (cumpliendo sus promesas) y resultados que estaban siendo palpables en varios de los indicadores sociales y económicos del país.

La pobreza siguió disminuyendo⁸, entre 2007 y 2017, del 36.7% al 23.1%. La extrema pobreza por primera vez en la historia nacional había descendido a niveles menores al 10%, pasando del 16.5% al 8.4% durante los 10 años del gobierno de la RC. La desigualdad de ingresos (Gini) también se redujo del 0.551 al 0.462. Esta combinación entre el decir y el hacer convirtieron a la Revolución Ciudadana en un discurso político autónomo, principalmente galvanizado por la figura de Rafael Correa. Si de algo adoleció el campo popular progresista en la década de los 80 y 90 fue de referentes o liderazgos personales que sean capaces de completar el ciclo de la representación política. Rafael Correa terminó por convertirse en un significativo de representación del propio campo popular progresista. Al menos de un sector importante y que no tardaron en denominarlo “correísmo”.

Las 14 victorias electorales⁹ (incluidas 3 elecciones presidenciales en primera vuelta) se constituyeron en reflejo de que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana representan un discurso político receptado ampliamente en la sociedad. Recuperó la confianza en la democracia y fundamentalmente la legitimidad del Estado en un primer momento. Con los mismos datos del Latinobarómetro, tenemos que el *apoyo a la democracia sobre otra forma de gobierno* pasó de un 59% en el año 2006 a un 72% en el 2017. Desde otro ángulo, las personas encuestadas que respondieron tener *ninguna confianza en el gobierno* pasaron del 57% en el año 2006 al 18,7% en el 2017. Aunque también se debe considerar que luego de 10 años de ejercicio del poder, la RC como proyecto político y sistema discursivo también sufrió un desgaste. La evolución de las respuestas que aseguraban que *el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio* pasó de 88% en 2006, a un 35% en el

⁷ “La larga noche neoliberal” fue como Rafael Correa describía a la etapa de gobiernos neoliberales y oligárquicos previo a 2007.

⁸ Datos tomados de la web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/Junio-2021/202106_Boletin_pobreza.PDF. Visto 07 julio 2022.

⁹ Redacción El Telégrafo (29 abril 2017). ‘Resaltan los 14 triunfos de la Revolución Ciudadana’. El Telégrafo. <https://bit.ly/3Azfbco>. Visto 08 julio 2022.

2013, hasta un 61% nuevamente en el 2007. Quizás este desgaste no fue tan grande como el del campo oligárquico neoliberal en 2006, pero igualmente la capacidad de dislocación frente a este bloque perdió su efectividad con el tiempo. La RC, o el *correísmo*, se terminó convirtiendo en el centro de las relaciones de alteridad tanto del MIE y de movimientos sociales como del campo oligárquico neoliberal.

Intentando resumir lo analizado en este segundo apartado, las transformaciones que se originan a partir de finales de 2006 con la aparición de la Rafael Correa y la Revolución Ciudadana como proyecto político se producen más rápido que en las décadas pasadas. Comenzando con la *relaciones de alteridad*, en un primer momento existe un momento equivalencial, en términos de Laclau, en donde el campo popular progresista logra generar un bloque de unidad en contra del adversario que impide la realización de sus demandas y su propia identidad. Es decir, el campo oligárquico neoliberal. Pero es a partir de la aprobación de la nueva Constitución de 2008 que este bloque progresista comienza a fracturarse y diferenciarse entre la RC y el resto de los sectores de izquierda, incluido el MIE. Es de esta manera que la RC pasa de ser un aliado a un adversario y para la RC estos sectores se convierten también en “partidocracia” o élites tradicionales que bloquean la *transformación radical* del país. En otras palabras, se los ubicaba en el mismo lugar que al campo oligárquico neoliberal.

En el caso de la *representación*, lo más destacable no recae solo en la aparición de la RC como proyecto político que representaba las demandas represadas por el campo popular, sino además la transformación del nombre de Rafael Correa en un significante de ese cambio. Para los años finales de su gobierno, esta representación se replegaría en sus extremos para simbolizar una nueva identidad política que terminó por constituirse, el *correísmo*. El resto de los sectores que comprenden el campo popular progresista durante esta etapa adolecieron de dos elementos: capacidad de representación electoral y de liderazgos individuales que pudieran competir con Rafael Correa. Del campo oligárquico neoliberal, valga decir que en esta nueva etapa de rearticulación tuvieron de fondo a una nueva agrupación política creada en 2013 bajo la figura del banquero Guillermo Lasso. Más allá de los significantes tradicionales que siempre se manejaron como libertad, reducción del Estado, prosperidad, individualismo, este nuevo representante se construye a partir de un significante nuevo, el *anticorreísmo*.

En el ámbito de la *perspectiva de la tradición*, los elementos más destacables de la transformación de las identidades políticas fue la traslación del discurso más indigenista que

había causado la irrupción del MIE en los años 90 hacia la Revolución Liberal de Eloy Alfaro (puertas adentro) y las gestas de independencia encabezadas por Simón Bolívar (puertas afuera). Las figuras de Alfaro y de Bolívar se volvieron centrales en el discurso del campo popular progresista y particularmente de lo que se consolidó como la Revolución Ciudadana posteriormente. Aunque esto no impidió que la RC tratara de incluir de manera protagónica conceptos de corte indígena en su discurso como lo fue la interculturalidad o el *sumak kawsay*.

Finalmente, sobre los cambios en el *locus de enunciación* pudimos observar como el campo popular progresista luego de 26 años logra recuperar al Estado como su principal lugar de enunciación. La victoria electoral en 2006, y posteriormente en 2009 y 2013, reafirmaron a la RC en un locus que había llegado a un punto de deslegitimación muy alta luego del periodo oligárquico neoliberal entre 1981 y 2006. La capacidad de *decir haciendo* que obtuviera la RC no la había tenido ningún actor del campo popular progresista desde la Revolución Juliana¹⁰ en 1925. El resto de campo popular progresista, como el MIE o los sindicatos, se mantuvieron en *la calle* como espacio primordial para ejercer oposición al gobierno de Rafael Correa. El campo oligárquico neoliberal sufrió el verse despojado del Estado, lo que lo obligó a replegarse a otros lugares de enunciación, especialmente a los medios de comunicación que, en algunos casos, se convirtieron en actores políticos desde donde operaba la oposición a la Revolución Ciudadana. Inclusive llegaron a compartir espacios en algunas movilizaciones sociales con algunos actores del campo popular.

Conclusiones

Partir desde la teoría del discurso y las identidades políticas para entender el proceso histórico de una sociedad nos puede permitir ver matices que desde otros ámbitos más tradicionales (sistema político, gobernanza, calidad de la democracia, etc.) se pueden pasar alto. Poner el enfoque de estudio en un devenir histórico en permanente transformación permite echar luz sobre algunos puntos ciegos que la ciencia política a veces pasa por alto. Lo que se logra encadenando procesos sociales de media y larga data es desenredar los sistemas discursivos que yacen detrás de cada actor. Las identidades políticas no son compartimentos estancos casi inamovibles en el tiempo y sin interconexión. Los sistemas discursivos de toda identidad política se encuentran en permanente evolución a consecuencia de la interacción con otros

¹⁰ La Revolución Juliana fue un movimiento político compuesto por una fracción del Ejército ecuatoriano que derrocó al presidente Gonzalo Córdova en julio de 1925. Este golpe de estado fue el fin del periodo de gobiernos plutocráticos y el inicio de un proceso de modernización del Estado para poner freno al poder de las oligarquías nacionales.

sistemas transformando sus relaciones de alteridad, sus dinámicas de representación, mitos históricos y sus lugares de enunciación.

La contingencia de la historia hecha al traste cualquier intento por encontrar una teoría universal para todos los contextos sociales. El enfoque constructivista del discurso político implica asimilar siempre el contexto particular de cada momento de la historia en una sociedad determinada si queremos entender las transformaciones o cambios que suceden y el porqué de estos. Para este trabajo en particular elegimos algunos criterios que facilitan este proceso de caracterización de estas identidades y sus discursos, pero podrían ser otros. La vocación de este trabajo es poder generar una reflexión teórica a partir de un contexto social particular. Es decir, un trabajo simultáneo entre aportar con herramientas conceptuales al mismo tiempo que tratamos entender procesos políticos y sociales determinados. En este caso, la historia política reciente del Ecuador.

El regreso a la democracia en el Ecuador estuvo marcado por la regeneración o modernización de los sistemas discursivos de los campos políticos, el popular progresista y el oligárquico neoliberal. Aunque fueron en momentos y velocidades distintas, estuvieron condicionados por el devenir del otro. No pasó mucho tiempo desde el retorno a la democracia para que las oligarquías reconstruyeran su discurso bajo el paraguas neoliberal y el liderazgo fuerte de León Febres Cordero para cooptar el Estado durante décadas. El campo popular progresista parecía en *fuera de juego* ante el embate oligárquico y el descalabro de sus referentes, políticos y simbólicos, a nivel internacional. La contingencia histórica devino en la maduración política del Movimiento indígena del Ecuador a finales de los años 80. Maduración que tenía décadas de proceso y que vino a ocupar el espacio que la izquierda tradicional dejó en el campo popular. El levantamiento del Inti Raymi en junio de 1990 terminó reconfigurando los ejes de discusión ampliándolos a nuevos significantes y a nuevos movimientos sociales que puedan ser capaces de dislocar al neoliberalismo como discurso hegemónico. La relación que mantuvieron los gobiernos neoliberales y el MIE pueden traducirse en relaciones de dislocación de estos últimos frente al discurso globalizador del neoliberalismo.

El final del siglo XX y los primeros años del siglo XXI fueron testigos de una disputa entre el campo oligárquico encaramado en el Estado y al campo popular progresista desde su fuerza de movilización social. El discurso popular progresista se lo puede considerar como el exterior constitutivo de del neoliberal oligárquico. Fueron años de inestabilidad política,

debacle económica y estallido social que derivó en una gran crisis de representación. Podemos entender que, tanto los actores, sus demandas, mitos y lugares de enunciación, son también significantes políticos cargados de valor simbólicos que puede variar en el tiempo. En este caso, tanto el neoliberalismo oligárquico como el progresismo popular terminaron desgastando el valor movilizador de sus discursos que se resumen en el “que se vayan todos” de los años 2005 y 2006. Esta erosión en la capacidad de representación abrió un espacio para la rearticulación de los discursos vigentes o la aparición de algo nuevo.

La aparición de la Revolución Ciudadana como proyecto y actor político termina siendo un parteaguas en la historia política del Ecuador al reconfigurar nuevamente el sistema político ecuatoriano por varias razones. En primer lugar, porque permite que el discurso del campo popular progresista ocupe nuevamente el Estado como lugar de enunciación luego de décadas. Trasladar la indignación, propuestas y horizontes desde de la movilización social hacia el gobierno nacional permitió pasar solo del decir al hacer. La capacidad de transformar la realidad y la institucionalidad en diferentes coordenadas a las neoliberales provocó resignificaciones a nivel de todo el espectro político. Que la RC materialice o cumpla muchas de las demandas del campo popular en la etapa neoliberal (antineoliberalismo económico, defensa de recursos naturales, deuda externa, soberanía nacional, integración latinoamericana, reparación de derechos humanos) dejó al MIE y otros movimientos sociales sin significantes que defender, lo que los condicionó a replegarse a demandas más corporativas con menos proyección de representación social. Y por el lado contrario, el campo oligárquico neoliberal fue forzado a replegarse a otros espacios de enunciación para evitar que la RC desmantelara la institucionalidad neoliberal construida. A nivel más social cultural, la RC significó una disputa contrahegemónica al neoliberalismo pero que no terminó por consolidar una nueva. Desde cierto enfoque teórico, significó revivir lo político en un momento en que el neoliberalismo quería apagarlo al ‘pregonar que “no hay alternativas” a su discurso y modelo social.

Luego de unos primeros años de unidad (lógica de equivalencia) del campo popular progresista bajo el paraguas de la RC, el desgaste y los conflictos que aparecieron dentro de este bloque, resultaron en la constitución de este proyecto en una nueva identidad política con una dinámica propias de alteridad (partidocracia), representación (Rafael Correa/correísmo), mitos históricos (Alfaro y Bolívar) y con un locus de enunciación centrado en el Estado que los diferenciaba de los demás actores.

Esta nueva identidad política provoca cambios en los ejes de discusión, posicionamiento y ordenamiento político del país y en última instancia termina un elemento nuevo de interacción: el anticorreísmo. Es decir, como exterior constitutivo del discurso correísta. Aunque es un ámbito que desborda esta investigación, es necesario dejarlo apuntado para futuras investigaciones. El fenómeno anticorreísta es, en principio, el resultado de las relaciones de alteridad que construyó la RC durante sus 10 años de gobierno y que impregna tanto al campo popular progresista, como una adición más a su identidad, como al oligárquico neoliberal, siendo la premisa sobre la cual reconstruirá su identidad política. A partir del 2014, este nuevo eje formado por estos dos sistemas discursivos (correísmo-anticorreísmo) se convertirá en cardinal para sistema político ecuatoriano hasta la actualidad.

Asimismo, este análisis tiene un límite temporal en el año 2017, cuando Rafael Correa dejó la presidencia de la República, pero las transformaciones en las identidades políticas se mantienen. La importancia para entender las dinámicas presentes implica entender las raíces e inercias del pasado. Para la RC el cambio más importante que tendrá que enfrentar será el no tener más al Estado como su locus de enunciación. Cómo afectará esta falta de poder institucional tendrá que analizarse en su contexto futuro para entender de mejor forma sus consecuencias.

Para terminar, debemos resaltar nuevamente la importancia que el estudio de las identidades políticas al permitir entender a la historia y sus actores como dinámicos, interconectados y en permanente evolución. Visualizar y entender estos cambios a lo largo del tiempo permite que la ciencia política sea más precisa y amplia en sus aportaciones al entendimiento de los cambios sociales.

Bibliografía

- Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina : la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Homo Sapiens.
- Alianza País. (2006). *Plan de Gobierno de Alianza País 2007-2011* (pp. 1–73).
- Altmann, P. (2017). Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador. *Antropología Cuadernos de Investigación*, 12, 105.
<https://doi.org/10.26807/ant.v0i12.76>
- Barrera Guarderas, A. (2001). *ACCION COLECTIVA Y CRISIS POLITICA. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Abya-Yala.
- CAIC. (2008). *Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana*.
- Comisión de la Verdad. (2010). *Informe de la Comisión de la Verdad. Tomo I*. Ediecuatorial.
- CONAIE. (1994). *Proyecto político de la CONAIE* (Vol. 59).
- Freidenberg, F. (2003). Ecuador. In *Partidos políticos de América Latina* (Issue January). Fondo de Cultura Económica.
- Freidenberg, F., & Alcántara Sáez, M. (2001). *Los dueños del poder. Los partidos políticos en Ecuador (1978-2000)* (Vol. 0). FLACSO, Sede Ecuador.
- Grosso, A. (2012). *Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas: un estudio comparado del populismo latinoamericano*. Poliedros.
- Howarth, D. (1998). La teoría del discurso. In D. Marsh & G. Stoker (Eds.), *Teoría y métodos de la ciencia política* (pp. 125–142). Alianza.
- Kintto, L. (2015). *Ecuador cara y cruz. Del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana. Tomo II*. CIESPAL, Ediciones.
- Laclau, E. (2000). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo* (Segunda Ed). Nueva Visión.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Fondo de Cultura Económica.
- Lalander, R., & Ospina Peralta, P. (2012). Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador. *Cuestiones Políticas*, 28(2012), 13–50.

- Martínez Abarca, J. M. (2010). *El Cascabel del gatopardo. La Revolución Ciudadana y su relación con el movimiento indígena*. Abya-Yala, FLACSO Ecuador.
- Montúfar, C. (2000). *La reconstrucción neoliberal. Febres Cordero o la estatización del neoliberalismo en el Ecuador 1984-1988*. Ediciones Abya-Yala.
- Ospina Peralta, P. (2009). Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa. *Culturas Políticas En La Región Andina*, 85–116.
<https://doi.org/10.31819/9783954871513-005>
- Ramírez, F., & Stoessel, S. (2015). Campos de conflictividad política y movimientos sociales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. *Plural*, 3, 2015.
- Recalde, P. (2013). Elecciones presidenciales 2006: una aproximación a los actores del proceso. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 27, 15.
<https://doi.org/10.17141/iconos.27.2007.195>
- Rodas Chaves, G. (2000). *La izquierda ecuatoriana en el siglo 20 : (aproximación histórica)*. Abya-Yala.
- Salvador Lara, J. (2010). *Breve historia contemporánea del Ecuador*. Fondo de Cultura Económica.